

## Perú 1975. Un año de crisis, un año de cambio

IRENE ZEA PRADO\*

A ocho años de distancia la revolución iniciada por los militares peruanos en 1968 asume un cariz bastante diferente al de sus primeros años. El término socialista ha sido borrado de los discursos oficiales; algunas empresas nacionalizadas, como la industria pesquera y la harina de pescado, regresan a la propiedad privada y la tensión en las relaciones con los Estados Unidos ha desaparecido con la nueva entrada de capitales extranjeros. Para muchos observadores éstos no son más que síntomas de un contraproceso, y para muchos otros una lógica definición de una revolución que nunca intentó ir demasiado lejos.

Sin embargo, al igual que hace ocho años, el proceso peruano, salvo con raras excepciones, está pobremente entendido. En 1968 representó toda una novedad, e inmediatamente todos los teóricos y los no teóricos procedieron a clasificarlo y a catalogarlo. Se escribieron guías para entenderlo; se publicaron folletines, proclamas oficiales, libros, artículos y ensayos. El proceso fue explicado indistintamente como "nacionalista", "progresista", "revolucionario", "nasserista", "reformista burgués", "humanista" y "fascista". Con una terminología vieja se pretendía explicar un fenómeno nuevo, dando lugar a una serie de ambigüedades y fallas de apreciación, dejando escapar lo más importante: su singularidad, su originalidad.

Si bien es cierto que la historia reciente del Perú se inscribe dentro de la corriente modernizante de un mundo interdependiente, la trastocación de sus estructuras y su nueva fisonomía tienen características propias, que le son peculiares sólo al Perú. Quizás el rasgo más sobresaliente sea el de los militares como agentes de cambio. El 3 de octubre de 1968 un grupo ideológico asalta las Fuerzas Armadas y en su nombre inicia todo un proceso revolucionario. El sector que tradicionalmente había representado las fuerzas de la estabilidad y del orden se pronuncia ahora en favor de las reivindicaciones populares. Esa traición intrínseca de los militares, que de ser el brazo armado de la oligarquía se convierten en una fuerza política, llevaría a todo un trastocamiento de las estructuras del poder. Ello afecta por igual a la clase propietaria y a la obrera.

\* Profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte los cursos sobre las relaciones entre México y Estados Unidos y organismos internacionales. Miembro de la Sección de América Latina del Centro de Relaciones Internacionales de la misma Facultad. Licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México y estudios superiores en el Centro de Estudios Latinoamericanos del Macalester College, de Minnesota. Ha publicado artículos de su especialidad en revistas nacionales y extranjeras.

Sin embargo el proceso iniciado no es nada claro. Se carece de una ideología precisa, y en un principio el nuevo régimen militar se define a sí mismo negativamente: no son ni comunistas ni capitalistas. Eso sí, se pretende un cambio sustantivo de la sociedad, e irónicamente estos militares modernizantes llevarían a cabo la mayoría de los programas reformistas propuestos por el APRA y otros grupos civiles, que ninguno de los gobiernos anteriores fue capaz de realizar.

Estamos así ante la presencia de un nuevo fenómeno en la América Latina: la de unos militares desarrollistas, nacionalistas y populistas. Efectivamente, el gobierno de las Fuerzas Armadas del Perú pretende el desarrollo de una sociedad industrial moderna que implica, por un lado, la eliminación de la oligarquía y sus aliados los inversionistas extranjeros como centro de poder hegemónico y, por el otro, la integración de todos los sectores sociales al proceso del desarrollo económico. Lo anterior presupone necesariamente una modernización y un cambio que se va a dar a un nivel muy extenso, haciendo del Estado la piedra angular del proceso.

Con el gobierno de las Fuerzas Armadas del Perú se abre una nueva alternativa para el subdesarrollo latinoamericano: la de un Estado nacionalista militar revolucionario.

Durante sus seis primeros años la revolución se dedica a cambiar las viejas estructuras y a poner en marcha un nuevo experimento social. Se parte entonces de una nueva concepción, y subdesarrollo y dependencia son dos términos sinónimos. Hasta 1968 se creyó que el desarrollo nacional se iba a generar a base de grandes inyecciones de capital externo. La nueva estrategia del gobierno militar se apartaría de este esquema, basando su crecimiento económico en la explotación de los propios recursos naturales hasta entonces en manos del capital extranjero, por lo que la tarea no estaría libre de escollos.

Las reformas estructurales emprendidas por los militares en esta primera fase nacionalista y antimperialista se pueden definir cronológicamente de la manera siguiente:

*1968:* seis días después del golpe, la ocupación de Brea y Pariñas y la expropiación del complejo industrial de Talara.

*1969:* Control estatal del crédito, firma del pacto andino, enseñanza gratuita, inicio de la reforma agraria, ley general de minas, control estatal sobre los bancos privados, estatización del sistema de irrigación, reorganización del sistema judicial, expropiación de las empresas azucareras.

*1970:* Expropiación de telégrafos, ley general de la industria, nacionalización de teléfonos, control de cambios, estatización de numerosos complejos y amnistía general.

*1971:* Creación de SINAMOS, expropiación de nuevos yacimientos mineros, expropiación de la televisión y ley general de comunicaciones.

*1972:* Toma de la Standard Oil, ley general de educación, elección de los consejos de autogestión de las primeras trece cooperativas de producción agraria, establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, nacionalización de la energía eléctrica.

1973: Expropiación de las empresas productoras de harina de pescado, monopolio del Estado sobre la comercialización del abono, estatización de la producción de cemento.

1974: Expropiación de Cerro Pasco Corporation y de las empresas del grupo Grace, ley sobre propiedad social, expropiación de la prensa y formación de la Confederación Nacional Agraria.

Todos las medidas arriba enunciadas forman parte del famoso Plan Inca, que se reveló como guía de acción seis años después de iniciado el proceso. Sin embargo el proceso parece detenerse en ese punto. Pasada la fase antioligárquica y antimperialista no es claro el paso siguiente. Es cierto que se habló del "socialismo", pero éste nunca fue definido científicamente. Se recurre a términos ambiguos, como medio capitalismo y medio socialismo, lo que indica ya una falta de perspectiva bastante grave. Las dimensiones se pierden, y la revolución a partir de su séptimo año entra en un periodo bastante crítico. Un periodo de ajuste y reajuste, de avance y retroceso. Un periodo de definición. 1975 está marcado por la crisis y el cambio. Se está jugando el futuro de la revolución. Una revolución que, por su misma heterogeneidad y complejidad, era muy difícil de sostener. Se plantea en ese año el problema de la sobrevivencia. Se impone una redefinición de conceptos, y se abandonan ciertos principios básicos. Muchas de las reformas dan un paso atrás, y para muchos observadores el experimento peruano claudica. Juicio precipitado, tal vez, pero lo importante no es condenar o absolver, sino comprender. Un rápido examen sobre los principales acontecimientos que marcan 1975 nos ayudará.

#### *El cinco de febrero*

1975 se inicia violentamente. Varios miembros del gabinete sufren atentados, y rumores de una guerra con Chile se acrecentan. Pronto harán cien años de la Guerra del Pacífico, en donde Bolivia perdió su provincia marítima y Perú Arica. La hipótesis de una posible guerra tiene un tremendo efecto psicológico en un país postrado y abatido con un pasado glorioso que pesa demasiado. Pero lo importante aquí es el sentido o la función de los rumores. Éstos, junto con otros, tienden a crear un estado de confusión e inseguridad. Son parte de toda una campaña tendiente a la desestabilización del régimen. Después de lo de Chile se hace necesario detener extremos. La revolución emprendida por los militares peruanos ha ido demasiado lejos. Hay límites. Basta de ambivalencias. El proceso se tiene que definir. Concretamente hacia los valores del llamado mundo occidental.

El gobierno de las Fuerzas Armadas no es ajeno a estas presiones. Dentro de su mismo seno hay divisiones. Se habla de dos grupos que, aunque unidos entre sí, difieren respecto al futuro de la revolución. A mediados de enero el general Edgardo Mercado Jarrín, considerado de derecha, dimite, por cuestiones de edad, a su puesto de primer ministro, dejando también el Ministerio de Guerra. Su lugar es ocupado por el general Francisco Morales Bermúdez, un

general de gran prestigio y respetado por todos los grupos. Sus antecedentes en la cartera de Economía y Finanzas han dejado buenas impresiones. Un radical para los izquierdistas por su participación en el golpe de Estado que llevó a los militares al poder en 1968, y un hombre pragmático y conservador para los derechistas que ven en su designación ciertos síntomas por parte del gobierno de alejarse de las políticas extremistas. Lo cierto es que el nombramiento de Morales Bermúdez abre las especulaciones sobre la sucesión presidencial. La salud del líder de la revolución, el general Juan Velasco Alvarado, está bastante deteriorada, y su enfermedad también es motivo de múltiples rumores. El general Morales Bermúdez es la segunda persona clave en el gobierno, y alrededor de él se hacen toda clase de conjeturas.

Detrás de los rumores de guerra con Chile, de los atentados políticos y del nombramiento del primer ministro, está la difícil situación económica, que en cierta forma condiciona los acontecimientos del país. Perú va de mal en peor, y su crisis económica se agudiza cada vez más. El precio de su principal producto de exportación, el cobre, ha declinado notablemente en el mercado mundial. El déficit en la balanza comercial, que en 1974 sumó 450 millones de dólares, en este año alcanza los 700 millones de dólares. El proceso inflacionario es de un 20%. Hay escasez de alimentos. No hay créditos. No hay inversión, y la productividad es baja.

El malestar económico se refleja también en la esfera política. Varios grupos de campesinos, no beneficiados aún por la reforma agraria, realizan ocupaciones violentas de tierras, las críticas al gobierno, tanto de la izquierda como de la derecha, aumentan, y las huelgas se multiplican por todo el país.

Una de estas huelgas, la de un pequeño grupo de la Guardia Civil, sería la gota que derramaría el agua. Lo que empezó siendo un pequeño paro en demanda de aumentos salariales y beneficios sociales, pronto se convertiría en una crisis de alcance nacional. Quizás la mayor crisis que haya enfrentado el gobierno militar desde su pacífica toma del poder en 1968.

Efectivamente, el 5 de febrero de 1975 estalló la violencia en las calles del centro de Lima con un saldo, según los voceros oficiales, de 500 heridos, 100 muertos y un daño estimado en 27 millones de dólares. Además del daño físico, estaba el daño moral, la lesión infringida al proceso revolucionario que dejaría al descubierto su más grande falla: una revolución hecha por decreto con una mínima participación popular.

Los acontecimientos se sucedieron rápidamente. La huelga de casi 7 000 policías de Lima "sin propósito político aparente", fue reprimida brutalmente por elementos de las Fuerzas Armadas la madrugada del cinco de febrero. 1 500 policías atrincherados en el cuartel Victoria, que protestaban precisamente por las tácticas represivas de las autoridades, fueron sacados con lujo de la fuerza y llevados al cuartel general.

Ante la noticia del asalto de las Fuerzas Armadas miles de jóvenes se trasladaron al centro de la ciudad, robando autobuses, dañando automóviles y apedreando comercios. Pronto el cuadro fue completado con la presencia de millares de marginados, venidos de las "villas miserias", que se dedicaron al

pillaje. Acción facilitada por la total ausencia de la vigilancia policial. Los motines tuvieron una doble faceta. La primera fue la violencia organizada por los opositores del régimen, que procedieron al ataque y al incendio de las instituciones públicas y locales de periódicos expropiados por el gobierno. La segunda revistió la forma de una violencia espontánea, que, aunque azuzada por los agitadores políticos, fue perpetrada por los marginados de la ciudad, los cuales desataron el vandalismo en el área comercial del centro de Lima. El Círculo Militar del Perú, el edificio del SINAMOS, la sede de los diarios *Correo y Ojo*, la Embajada de los Estados Unidos y múltiples tiendas de toda índole sufrieron daños considerables.

Después de casi cinco años de violencia, tanques de fabricación soviética hicieron su aparición en la calles de Lima, dando lugar al segundo encuentro frontal de las Fuerzas Armadas contra lo que se llamó "perturbadores del orden público". Pronto la situación fue dominada, y el espectáculo que quedó era realmente deplorable. Todavía con olor a quemado los diarios matutinos comenzaron a circular la mañana siguiente, haciendo apenas mención de los sucesos ocurridos el día anterior. Lo mismo ocurrió con las noticias difundidas por las radiodifusoras. La situación, sin duda, era grave, pero no se le quería admitir como tal, sin antes tener la versión oficial de los sucesos. Sin embargo se declaró el día feriado para todos. Oficinas de gobierno y comercio cerraron. Se suspendieron las garantías individuales, se estableció el toque de queda de las diez de la noche a las cinco de la mañana, y se decretó estado de emergencia por treinta días.

Una vez contados los muertos, los heridos y los daños materiales se dieron las cifras oficiales, y se pretendió que todo esto no había pasado de ser un lamentable incidente. Sin embargo se expulsaron a dos corresponsales extranjeros de la agencia de noticias Latín-Reuter por difundir "información no verídica". Ellos habían hablado de cierto número de policías muertos, que el gobierno negó, no era posible que éste hubiera disparado contra su propia gente; hablaron también de cierta división en las altas esferas políticas, que el gobierno también rechazó, las Fuerzas Armadas estaban más unidas que nunca, y por último se refirieron a una crisis de carácter general, que el gobierno desmintió. Según voceros oficiales la situación estaba perfectamente controlada, y la calma había retornado al país. Pero los hechos eran los hechos y ni aún el propio gobierno podía ignorarlo. Era pues necesario dar una explicación para calmar los ánimos y restablecer la confianza. Se buscó un culpable, por supuesto fuera del sistema, y sacaron a relucir al ALPRA y a la CIA como instigadores de los dramáticos acontecimientos del cinco de febrero. Sin lugar a dudas, tanto el viejo partido político como la agencia de inteligencia norteamericana estuvieron implicados en los sucesos; sin embargo no se trataba de un hecho aislado como se pretendió, sino que formaba parte de una crisis global por la que atravesaba el sistema. El cinco de febrero no fue más que la radicalización de una situación que se venía observando desde hacía ya tiempo.

Cuando los militares tomaron el poder en 1968 iniciaron un proceso revolucionario que trastocó las estructuras del poder e impuso modificaciones sus-

tanciales a todo el sistema. Tal vez por la novedad, o por la inexistencia de un grupo social capaz de llevar a cabo reformas que la modernización experimentada por el país planteaba como indispensables, la labor de los militares no encontró mayor oposición. La aparición de formas económicas modernas o nuevas (la pesca y algunos cultivos intensivos de exportación) reveló la necesidad de transformar el viejo capitalismo de enclave en un capitalismo moderno. De hecho, todas las reformas realizadas por el gobierno de las Fuerzas Armadas a partir de 1968 fueron formas específicas de modernización de todo el aparato del Estado y de la economía atrasada, e incluso el choque frontal con los Estados Unidos por la nacionalización de algunas de sus filiales correspondía al espíritu de modernización, autonomía y soberanía de un Estado moderno. Si bien este espíritu renovador no encontró mayor resistencia en un principio, tampoco encontró mayor apoyo. A medida que el proceso se fue radicalizando la oposición por parte de los grupos oligárquicos y sus aliados los inversionistas extranjeros fue creciendo, y la indiferencia por parte de los grupos populares fue aumentando. Los primeros se vieron afectados directamente en sus intereses por las reformas, y los segundos no vieron resultados inmediatos, pero sí sufrieron el costo de las mismas.

Esta situación se agudizó en 1974 con la nacionalización de la Cerro Pasco Corporation, la mayor compañía minera norteamericana en el país, con la introducción del principio de autogestión obrera sancionado por medio de la Ley de Propiedad Social y con la expropiación de los principales diarios peruanos. El toque final fue la nacionalización de los telégrafos internacionales. Los cambios estructurales, por su misma naturaleza, lejos de llevar a una estabilización, provocan una serie de desajustes, que en Perú se manifestaron en un malestar general. De esta forma se hizo responsable al gobierno de todos los males del país, y se sucedieron una huelga tras otra haciendo aún más angustiosa la situación económica, ya de por sí bastante deteriorada.

En el plano externo también se notó la radicalización del régimen al tratar de hacer más independiente, relativamente, su política exterior. Los Cuerpos de Paz fueron expulsados, y el presidente Velasco Alvarado tomó la iniciativa de concertar la solidaridad de los países latinoamericanos para enfrentar la política intervencionista de los Estados Unidos, en vísperas de la visita del secretario de Estado, Henry Kissinger, a Latinoamérica.

La radicalización del régimen lo llevó a un aislacionismo total, perdiendo la poca popularidad que tenía entre las masas. Su carta mayor, la Reforma Agraria, estaba aún en vías de experimentación. Muchas tierras faltaban por afectar, y los nuevos organismos agrícolas, como las cooperativas y las sociedades de interés social, estaban muy lejos de cumplir la meta fijada, siendo su productividad muy baja y afectando, por lo tanto, la distribución y el aprovisionamiento de los bienes alimenticios.

De esta forma, las clases populares, en nombre de quienes se suponía se hacía la revolución, se sintieron ajenas a ésta, y en el momento de crisis no acudieron en su ayuda. Precisamente, los opositores del régimen tocaron ese talón de aquiles, y explotaron maravillosamente el potencial subversivo de las

“villas miserias”. En lo que respecta a las clases medias y a los profesionales tampoco entendieron la naturaleza del experimento que se estaba llevando a cabo, y salvo raras excepciones se dedicaron a una crítica constante, señalando puramente los elementos negativos del régimen. Para unos la revolución no había ido demasiado lejos, para otros era precisamente lo contrario. El caso es que no contaba con el apoyo de ningún grupo habiendo ya iniciado una serie de reformas, cuya continuación implicaba un costo, no sólo material, en una situación económica totalmente desfavorable, sino también de esfuerzo humano.

Así, la radicalización del régimen, que hizo crisis el cinco de febrero, ponía al descubierto una falla muy importante del experimento: una revolución por decreto que unida a su misma naturaleza contradictoria, confusa y falta de una ideología precisa harían muy difícil su consecución.

Efectivamente, los militares peruanos en un intento, loable por cierto, por trazar una línea original para resolver los problemas del subdesarrollo recurrieron a una fórmula un tanto ambivalente, que, a pesar de toda su buena voluntad, no pudo escapar de los cuadros de referencia ya existentes, quedando en un medio comunismo y en un medio capitalismo. Es decir, se intentaba una tercera posición, tomando algo de uno y otro sistema, pero sin definir exactamente qué, y lógicamente dando por resultado una rara e indefinible mezcolanza.

Por otro lado, se careció de una disciplina política o de una línea ideológica que se fue fabricando más bien por reacción que por decisión. Cada reforma provocaba una reacción subversiva y reaccionaria de las fuerzas históricas tradicionales, que el gobierno militar trataba de contrarrestar justificando, por una parte, esa medida a nivel teórico-ideológico y, por otra parte, tratando, sin mucho éxito, de ganarle apoyo para la misma. El SINAMOS era supuestamente el organismo burocrático encargado de organizar el apoyo popular a las medidas tomadas por el gobierno. La pasividad de las masas, el cinco de febrero, probó la ineficacia de dicho organismo. Efectivamente, durante los disturbios de aquel día, ningún sector civil salió en defensa de la revolución, a excepción hecha de la Confederación General de Trabajadores, que hizo un llamado pero sin especificar medidas de acción. Esto contrasta con la actitud de los grupos de oposición, quienes probaron estar perfectamente coordinados, alentando a los revoltosos y planteándole al gobierno la mayor crisis que quizás haya enfrentado durante sus seis años en el poder.

El cinco de febrero sería toda una lección para el gobierno de las Fuerzas Armadas, quien trataría de corregir sus errores mediante la participación popular y la clarificación ideológica.

### *El golpe de Estado*

Independientemente de las implicaciones internas de los acontecimientos del cinco de febrero en la política interna, los militares peruanos también estaban preocupados por las similitudes que tenían con los hechos externos, particu-

lamente los ocurridos en los países latinoamericanos, que poco a poco habían ido cayendo bajo la bota del fascismo. De hecho, Perú era el último régimen nacionalista que quedaba en el cono sur, después de la caída del gobierno de la Unidad Popular en Chile y de la muerte de Perón en Argentina. Lo del cinco de febrero muy bien pudiera haber sido un intento de desestabilización del régimen. Su posición congruente con la versión oficial que responsabilizó de los hechos al ALPRA y a la CIA. Motivos para una intervención por parte de los Estados Unidos los había. Perú había apoyado a Venezuela y Ecuador en su disputa con Washington sobre la Ley de Comercio Exterior; había expulsado a los Cuerpos de Paz; había comprado recientemente armamento a la Unión Soviética, y en el Pacto Andino era el principal promotor de una ley sobre el control de las actividades de las empresas extranjeras en el subcontinente americano.

Detrás del fantasma de la intervención del imperialismo norteamericano estaba la división dentro de las Fuerzas Armadas, distinguiéndose dos grupos. Por un lado los moderados y, por el otro, los radicales. Mientras que los primeros pensaban que la revolución había ido demasiado lejos, y que estos actos desafiantes sólo ponían en peligro la existencia del mismo proceso peruano, los segundos propugnaban por una mayor radicalización de la revolución como la única manera de enfrentar al imperialismo. El primer grupo estaba representado por el premier general Morales Bermúdez y el segundo por el presidente Velasco Alvarado. Ambos grupos estaban en favor de la revolución, pero diferían en cuanto al futuro de la misma. Así mientras Morales Bermúdez era partidario de una apertura en el sistema político, Velasco Alvarado se encerró en un autoritarismo absurdo. Tal vez, debido a su misma enfermedad, Velasco Alvarado, el factor más importante de unidad y de impulso revolucionario, cayó en un estado de paralización política, llegando a un estado de enajenación total, que inclusive puso en peligro la existencia del país mismo, como fue su determinación de enfrentar un conflicto armado con Chile.

La división de las Fuerzas Armadas se resolvió con la deposición del presidente Velasco Alvarado, mediante un pacífico golpe militar que puso al mando del país al general Morales Bermúdez. La tónica del proceso cambió abandonando el radicalismo que lo caracterizó durante sus seis primeros años.

Todavía en mayo, poco antes del golpe militar que lo alejaría definitivamente del poder, el general Velasco Alvarado expropió otra filial norteamericana, la Gulf Oil Company. Curiosamente los motivos de justificación de tal acción no fueron ni económicos ni políticos, sino morales. El presidente de Gulf Oil Corporation aceptó ante el Congreso de los Estados Unidos la utilización de soborno y otras medidas de índole parecida, por parte de su empresa a funcionarios de varios países latinoamericanos para facilitar el libre ejercicio de sus actividades en esa área. Tal conducta fue calificada por el gobierno del Perú como ofensiva a la dignidad nacional, por lo que juzgó pertinente el cese de sus operaciones en el país. Corrupción y conducta inmoral fueron las justificaciones de la expropiación. El monto de la indemnización se fijó en cerca de diez millones de dólares, que Washington aceptó sin pro-

testar. Sin embargo no ocurrió lo mismo con la nacionalización del complejo minero La Marcona, que se realizó dos meses después. En este caso específico, para efectos de indemnización, se tomaron en cuenta los adeudos al Estado, y se tomaron sin compensación sus instalaciones por incumplimientos contractuales. Este se calificó también como el caso típico de conducta inmoral de una empresa trasnacional, que beneficiaba en un mínimo a la nación peruana, puesto que exportaba la mayor parte del producto en forma de concentrados, y vendía a la empresa siderúrgica productos de menor calidad, entorpeciendo en esa forma el desarrollo del país.

Si bien en el campo económico prevalecía la línea de los progresistas, la situación se tornaba cada vez más difícil. La serie de medidas antinflación y la política de austeridad no hicieron mucho, por lo que se planteó la alternativa de cambiar de modelo económico. En torno a este punto se centrarían las discusiones entre los dos grupos, saliendo victorioso el grupo de los moderados, cuya política económica se basó en el regreso a ciertas formas del sistema anterior. El regreso a la iniciativa privada de varias empresas estatizadas fue una de ellas.

Así como el orden económico fue cuestionado, el orden político lo fue también. Los acontecimientos del cinco de febrero no fueron más que una manifestación de ello. El sistema estaba en crisis, y se imponía un cambio de estrategia. La manipulación burocrática de organizaciones títeres a través del SINAMOS, y la oposición abierta a cualquier organización popular de cualquier clase fueron totalmente contraproducentes, y sólo sirvieron para enfatizar el limitado alcance de las reformas gubernamentales para cambiar la vida de la mayoría de la población. El SINAMOS más que un organismo de participación popular se asemejaba a un aparato de seguridad del Estado. Había que repensar totalmente toda la cuestión y encontrar nuevas modalidades de ligar a las masas con el movimiento revolucionario.

No se habían terminado de contar los muertos y los heridos que dejó el saldo trágico del cinco de febrero, cuando dos nuevas organizaciones proclamaron su prontitud a llenar el vacío político existente: un comité coordinador de organizaciones populares y un comité ministerial. El primero anunció que él se encargaría del aprovisionamiento, de la seguridad y de la propaganda en defensa de la revolución, particularmente en las barriadas que constituyen el cinturón de miseria de la ciudad, y el segundo fue la respuesta oficial a la presión de los propios partidarios del gobierno que clamaban por la adopción de una medida efectiva. Ambas organizaciones tenían como objetivo primordial la organización de un movimiento político que representara y expresara los intereses de la revolución.

La idea de partido comenzó a circular por los aires, y pronto muchos grupos políticos se hicieron las ilusiones que esto significaba una apertura política por parte del sistema. El Partido Comunista y el más viejo partido de masas peruano, el APRA, lo interpretaron como un regreso al juego libre de partidos. Sin embargo muy pronto se decepcionarían. No era eso lo que los militares tenían en mente. Se trataba de una apertura del sistema, pero no a

ese nivel. Más bien esto se quedaría a un nivel teórico con una nueva fórmula que el gobierno de Velasco Alvarado denominó "democracia social de plena participación". El ideólogo de la revolución Carlos Delgado se encargaría de conceptualizarlo y de explicarlo. Pero antes de que las cosas fueran más lejos, el presidente peruano, en un mensaje a la nación, rechazó enfáticamente la idea de expresar a la revolución por medio de un partido. Desautorizando de esta forma a los dos movimientos —el comité de coordinación y el movimiento de la revolución peruana— que habían surgido en los últimos días para defender el proceso peruano y llenar el vacío de poder existente. Si se había de formar un movimiento de la revolución peruana, éste estaría estrictamente bajo el control militar. De esta manera, los primeros intentos de institucionalizar la revolución se quedaron en el aire, y sólo quedó ese concepto, un poco demasiado amplio y demasiado limitado, de "participacionismo".

Por supuesto, la clarificación ideológica a la que procedió el gobierno, inmediatamente después de los lamentables incidentes del cinco de febrero, incluyó también el nuevo concepto de "participacionismo". Partiendo de la vieja tesis, que reacusaba por igual al comunismo y al capitalismo, se elaboró el nuevo concepto. Ambos sistemas se sustentaban en economías no participatorias, puesto que los productores de riqueza no decidían el destino final de los excedentes económicos, ni los usos reales del poder.

De ahí que la proposición del gobierno revolucionario fuera, precisamente, la creación de un ordenamiento social basado en una economía, en la cual los medios de producción estuvieran predominantemente, y de una manera directa, en manos de los trabajadores.

El sistema de propiedad social fue la respuesta innovadora al desafío de crear un tipo diferente de propiedad que no fuera la estatal del comunismo, ni la privada del capitalismo. Se trataba de la creación de empresas de trabajadores, en las cuales la propiedad no se entregaba a personas individualmente, sino a todo el grupo social constituido en su mayor parte por obreros.

De la misma forma que se pugnaba por una economía de participación, también se luchaba por un sistema político igualmente de participación. Por principio, se reacusaba el sistema de partidos por su naturaleza elitista y monopolizadora y se proponía una transferencia y difusión de decisiones políticas a un nivel mucho más amplio. El esquema no era muy claro, pero de cualquier forma servía como respuesta a las presiones por una mayor participación de los grupos populares en el gobierno, rechazando el esquema de los partidos políticos o la probabilidad de un gobierno civil. Carlos Delgado, el ideólogo del grupo, se encargaría de explicar con mayor precisión el nuevo término.

A pesar de todos los esfuerzos de Velasco Alvarado por corregir la crítica situación por la que atravesaba el país, éstos resultaron inútiles, y el 30 de agosto de ese año, cuando se celebraba en Lima la Reunión de los no Aliados, fue anunciada la deposición del líder máximo de la revolución, general Juan Velasco Alvarado. El general Francisco Morales Bermúdez tomó en sus manos las riendas del país.

Este segundo golpe militar, al igual que el primero de 1968, tuvo su característica *sui generis*. No se trató de un golpe de Estado contrarrevolucionario, sino de un relevo en el mando para corregir desviaciones derechistas y acciones personalistas. Al menos esa fue la versión oficial. La unidad de las Fuerzas Armadas no había sufrido mella alguna, y el general Velasco Alvarado continuaba siendo considerado como el fundador y el baluarte de la Revolución Peruana.

Durante todo el régimen de Alvarado se había escuchado insistentemente el debate sobre la naturaleza del proceso. Que si era de izquierda, que si era de derecha, que si tendía hacia acá, que si tendía hacia allá. Entre otras muchas cosas, este segundo golpe militar se propuso corregir esa ambivalencia. Sin embargo en un principio la cuestión no se vio muy clara, y mientras unos afirmaban que el golpe había sido llevado a cabo por elementos de izquierda, otros aseguraban exactamente lo contrario.

Lo que no quedaba lugar a dudas era que se había terminado una fase en el proceso peruano, y había surgido una nueva. Es decir, la etapa de las reformas, de los cambios estructurales, había llegado a su fin para dar lugar al proceso de consolidación y afirmación de los logros obtenidos en la etapa anterior.

Cierto que se había iniciado una nueva etapa en la Revolución Peruana, pero el interrogante sobre su naturaleza persistía, lo mismo que las especulaciones sobre el futuro de la misma. Es decir, después de siete años once meses el experimento peruano continuaba siendo un enigma, tanto para sus partidarios como para sus críticos. Los izquierdistas lo habían aplaudido por sus cambios y reformas estructurales, sin embargo estaban preocupados por la gran distancia que existía entre el gobierno militar y las clases populares. Los del grupo de derecha, por su parte, lo habían tachado de comunista y totalitario, no obstante reconocían el hecho que ningún otro gobierno anterior había atraído tanto capital externo como el actual. Las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas no contribuyeron a aclarar el panorama, sino, por el contrario, lo hicieron más complicado aún. Si por un lado el grupo llamado progresista, encabezado por Velasco Alvarado, procedía con sus reformas, por el otro, ciertas actitudes arbitrarias y dictatoriales del líder de la revolución contradecían totalmente el carácter y la naturaleza de las reformas iniciadas. Velasco Alvarado, impaciente, tal vez por su mismo estado de salud, se volvió intolerante ante cualquier crítica. Agotado e inválido a los 65 años se fue alejando de los oficiales jóvenes de izquierda de hace siete años, y fue cayendo en la trampa de los provocadores de ultraderecha. La fuerza sustituyó al diálogo, y se ordenó la represión de huelgas promovidas por los trabajadores. Se ordenó la clausura del semanario *Marka* y el destierro de varios periodistas progresistas que daban su apoyo crítico al proceso desde una ubicación revolucionaria.

Por otra parte, la actitud bélica ante Chile persistió. Perú hizo una demostración de fuerza aérea en la frontera con ese país, hecho que fue interpretado por muchos observadores como un acto de desafío. Sin embargo el go-

bierno peruano no toleró ninguna crítica en contra de su gobierno amigo de Pinochet, y expulsó a los periodistas que así lo hicieron. La confusión rebasó barreras, y exactamente el día que se conmemoraba el aniversario de la guerra con Chile, que tanto le dolió al Perú, las Fuerzas Armadas tomaron el poder por segunda vez.

La noticia del derrocamiento de Velasco fue recibida en general con gran júbilo. Para los derechistas el nombramiento del general Morales Bermúdez implicaba un freno a los radicales partidarios de una Revolución Peruana más profunda y avanzada. Un hombre pragmático y conservador, como lo había demostrado durante su gestión como ministro de finanzas, seguramente corregiría las tendencias extremistas en las que había degenerado el proceso. Irónicamente, los grupos de izquierda consideraron el nombramiento igual que los otros, pero a la inversa. Es decir, Morales Bermúdez consolidaría y profundizaría el proceso. El cambio del régimen no era otra cosa más que el resultado del triunfo del ala izquierda de las Fuerzas Armadas. El propio presidente, al clausurar la V Reunión de los No Alineados, había declarado que la revolución seguiría adelante sin claudicaciones, y el comunicado oficial del 29 de agosto constataba la unidad de las Fuerzas Armadas.

Inmediatamente el general Morales Bermúdez descontrola a todo el mundo con una serie de medidas, que se interpretan de diversas maneras. Si por un lado afirma que el proceso continúa interrumpidamente sin posibilidades prontas del restablecimiento de un gobierno civil, por el otro lado, por primera vez en el gobierno encabezado por los militares, nombra a un buen número de civiles en su gabinete. Asimismo permite la repatriación de los periodistas expulsados, y por medio de una amnistía general las asociaciones y grupos antes prohibidos vuelven a salir a la luz pública. Los diarios y revistas clausurados vuelven a circular, y todo esto es considerado como una apertura democrática del sistema.

Sin embargo la situación equidistante no desaparece. Es verdad, hay una apertura y una amnistía, pero éstas son hacia la derecha y hacia la izquierda, ya que no sólo se permite el regreso de los líderes radicales, sino de los hermanos Belaunde Terry y de algunos líderes apristas. Asimismo la amnistía viene a vigorizar los partidos que por tantos años fueron considerados por el gobierno militar como reaccionarios e incapaces de operar siquiera mínimas transformaciones de la estructura socioeconómica del país. Pero si por siete años se pudo mantener esta política de equidistancia, ahora resultaría en extremo dificultosa. Terminada la etapa revolucionaria, la época de consolidación requiere de una multiplicidad de ajustes, que en la mayoría de los casos pueden generar un proceso contrarrevolucionario.

Perú no era la excepción, y la situación económica pesaba demasiado. Y un hecho era cierto, a pesar de sus renunciaciones teóricas y abstractas por el sistema capitalista, el Perú jamás había dejado de ser un país capitalista, y en cuanto al socialismo, sólo estaba jugando con el término. Si bien era cierto que se había empeñado en ser antimperialista le tenía demasiado respeto al capitalismo, puesto que sabía perfectamente que sólo de ahí podría obtener los

recursos financieros necesarios para sus objetivos. Así, junto a la reforma agraria, la nacionalización de los principales enclaves extranjeros, la reforma educativa y la expropiación de los medios de producción, veríamos la conservación de la propiedad privada de los instrumentos de producción, eliminación de la vida política y dirección inapelable de las Fuerzas Armadas.

Morales Bermúdez hace lo imposible por aliviar la crisis, pero ésta era insalvable, y para fines de 1975 se deja ver claramente el inicio de lo que muchos han llamado un proceso sistemático de retroceso. El periodo de realizaciones máximas logradas había concluido con Velasco Alvarado, y en el periodo de ajuste y reajuste se definiría el destino de la revolución.

Por lo pronto, en lo que va de agosto a diciembre de 1975 la atención del nuevo gobierno se centra en el problema económico. La crisis mundial del capitalismo llega también al Perú, y se extiende en él con su inevitable y contagiosa tendencia inflacionista. Cuando Morales toma el poder, la situación es crítica, hay un déficit terrible en la balanza de pagos, un total desquiciamiento en lo que se refiere a la situación fiscal, con el ahorro y la inversión muy limitados y la producción en un proceso de estancamiento total. Ante tal situación, se procura por todos los medios obtener divisas. Las exportaciones son la punta de lanza. Sin embargo sus precios han bajado considerablemente en el mercado mundial, y para hacerlas más competitivas se devalúa la moneda y se desalientan las importaciones. Pero resulta que el país tiene una industria deficiente, y esta medida sólo restringe la actividad de las industrias nacionales y favorece las de carácter transnacional. La situación no se alivia, sino, por el contrario, la necesidad del dinero es cada vez mayor, y la deuda externa por supuesto también crece. Es un círculo vicioso del que difícilmente se sale, y ese año, 1975, termina el país debatiéndose en una lucha por la sobrevivencia, mientras el sistema capitalista se va recuperando de los golpes infligidos por el Perú durante su primera etapa revolucionaria.